

3. Las tres economías

Una breve acotación teórica para enmarcar el problema y entender mejor cómo junto a las viejas divisiones encontramos superpuestas a estas tres economías en un espectro con distintos niveles de legalidad. Hemos afirmado que no hay mercado sin Estado. Lo que queremos decir con esta tesis es que el mercado lo constituyen espacios donde ocurren transacciones de compra y venta que juntan la oferta y la demanda. Las transacciones no ocurren en el aire sino en un territorio determinado o en varios territorios si uno sale fuera del país, todos administrados por Estados. Ni siquiera los mercados de internet que operan en un espacio cibernético escapan a esta realidad. Sigue que ningún tipo de transacción puede dejar de ser registrada, vigilada, observada y, si es necesario, sancionada si es transgredida. Así está constituido el mundo moderno. Toda operación tiene que ser legal, y debe ocurrir un pago de impuestos dentro de ese territorio, y para ello se requiere tanto información como capacidad de seguimiento de las transacciones. Si escapa a esta normatividad, debe ser perseguida, al punto que constituya una excepción y tenga un peso menor en relación con el conjunto. Esa es la legalidad, tal es su vigencia, y esta condición, precisamente, ocurre en los países modernos desarrollados, porque predomina la formalidad, al punto que ha sido internalizada y se toma como normal y lógica. Allí, a pesar de sus problemas sociales, el pacto social en general se cumple por medio del pago de impuestos: los individuos cumplen a cambio de protección y condiciones de bienestar brindadas o generadas por el Estado. Un mercado fuerte, entonces, existe con un Estado fuerte institucionalmente.

Sin embargo, estos presupuestos teóricos, que son propios de países desarrollados, de donde nace la teoría, ¿son aplicables a la realidad peruana? Ciertamente, sir- vieron de orientación a quienes propusieron cambios y creyeron en su optimismo ilusorio que eran repetibles, que solo estábamos “en

vías de desarrollo”. Lo cierto es que existen en pequeñas parcelas, acosadas por las no formales, empleando a una mayoría de trabajadores y, por lo tanto, no marcan el conjunto. Es exactamente al revés de lo que ocurre en un país desarrollado, lo que indica que estamos frente a un neosubdesarrollo. Todo peruano nace sabiendo o intuyendo que en nuestro país el Estado no controla todas las transacciones, indicio de su debilidad y de que, por ende, existe un pacto social impracticable. Necesitamos entonces otra teoría para ese Perú, que no puede ser explicado siguiendo los modelos teóricos nacidos en los países desarrollados e importados acríticamente en el Tercer Mundo, para que pueda entenderse a sí mismo.

En resumen, ¿cuáles son las características generales de estas tres economías según el espectro de legalidad que revelan la existencia de esa otra realidad?, ¿cómo, estando separadas, se relacionan las economías formales, las informales y las delictivas a través de vasos comunicantes?

La primera es que se trata de un fenómeno nacional, indicio de la escala e importancia que han logrado: existen espacios de compra y venta de bienes y servicios en todo el territorio donde operan las tres economías. La economía informal como su mala hermana, la delictiva, no es un fenómeno exclusivamente limeño o urbano. Opera abierta en todas las ciudades y zonas del país. En algún momento, al mismo tiempo que se elaboró el mapa de calidad de vida arriba citado, en 1994, se realizó por primera vez un mapa de focalización tributaria a nivel distrito para la administración tributaria, la Sunat. El estudio, dirigido por el autor, y documentado sobre una base de datos de gran calidad, trataba de medir cuánto recaudaba cada distrito del país y distinguir cuáles eran más importantes y, por lo tanto, intentaba saber dónde la Sunat debería concentrar su acción de vigilancia, de fiscalización a evasores tributarios. Al observar el mapa, quedaba claro que existían agujeros negros en todo el territorio, es decir, decenas de distritos que no registraban ningún pago de impuesto ni ninguna empresa. Esos lugares, salvo las ciudades, realidad más compleja porque concentra mayores actividades informales y delictivas, eran prácticamente los mismos distritos de más baja calidad de vida. El hecho común es que simplemente para ellos el Estado era una entidad lejana, inexistente o ignorable. Allí no había tributación,

no había mayormente transacciones registradas y no existían empresas grandes, medianas o pequeñas que tributaran al Estado. Su aislamiento y pobreza los tenía atrapados en lo que queda de la economía tradicional, pero sin los viejos patrones de dominación y explotación de antes que desaparecieron con las reformas del general Velasco. Ese tema, cabe advertir, no nos preocupa tanto, salvo si de lo que se trata es entender la pobreza extrema rural, que es un remanente colonial que ataca solo a una parte minoritaria de la población. Cuando a partir de los datos se hizo una verificación de campo en las ciudades, nuevo lugar de ubicación de la mayoría de los pobres, se pudo identificar otra anomalía en todo el país. Tributariamente hablando, existían mercados “liberados” donde se vendían productos informales e ilegales, mezclados con los de origen legal, lugares donde no entraba la Sunat, es decir, el Estado. A las miles de pequeñas y medianas empresas formales detectadas en la base de datos había entonces que sumarle muchas otras informales que no existen estadísticamente y cuya cuantificación es muy difícil. Este fenómeno ocurría por lo menos en toda ciudad medianamente importante del país, desde Puno y Juliaca hasta Piura y Tumbes. El estudio indicaba de modo aproximativo que existían lánguidas economías tradicionales desconectadas de la modernidad, muy aisladas, y también pujantes y crecientes economías informales y delictivas a nivel nacional.

La segunda característica del otro Perú es que, contra lo que comúnmente se cree, todas tienen una estructura piramidal. Es así porque en su interior existen jerarquías, lo que permite hablar con propiedad de estructuras sociales paralelas, asunto antes ignorado o poco discutido por los analistas más serios. En el Perú de hoy los de arriba no son los de antes aunque entre ellos no se junten ni se mezclen. Tenemos otros patrones. Obviamente, la élite nacional contemporánea está comandada por ese pequeño grupo directivo y propietario que maneja las grandes transacciones desde el vértice, sea en la economía formal, la informal o la delictiva. Mientras unos lucran de ellas, otros trabajan en ellas. Por lo tanto, existe una cierta modernidad donde hay grandes empresarios, si se prefiere llamarlos así, que operan con gerentes, contadores, financistas, proveedores y distribuidores, para abastecer a los consumidores de todo nivel de ingreso, donde predominan demográficamente los pobres, aquellos ubicados en

la base. Se trata de toda una “estructura” piramidal bien organizada y que opera de modo regular, que tiene su propia cotidianeidad.

En tercer lugar, hay características particulares que diferencian a cada una de estas tres economías. Están separadas por tipo de legalidad, ubicándose en distintos puntos del espectro de respeto a la ley, pero tómese en cuenta que no están aisladas, ni son totalmente contrapuestas o complementarias entre sí. A pesar de que tienen su propia dinámica, y su orden interno, operan todas en un mismo mercado y en un mismo territorio; poseen vasos comunicantes, donde determinados agentes operan en más de una, pasan de una a otra, o aprovechan su existencia según les convenga a sus objetivos y estrategias de sobrevivencia.

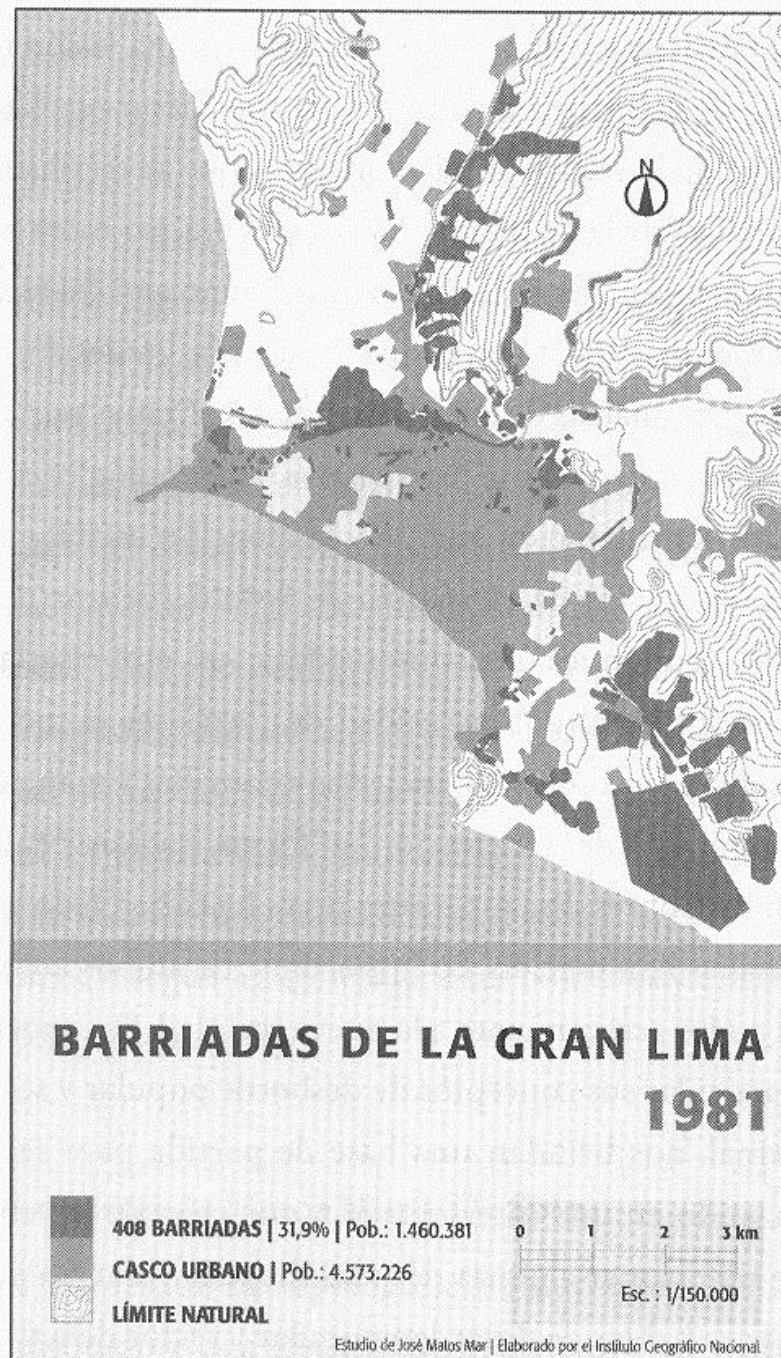
Los aportes de Matos Mar y De Soto

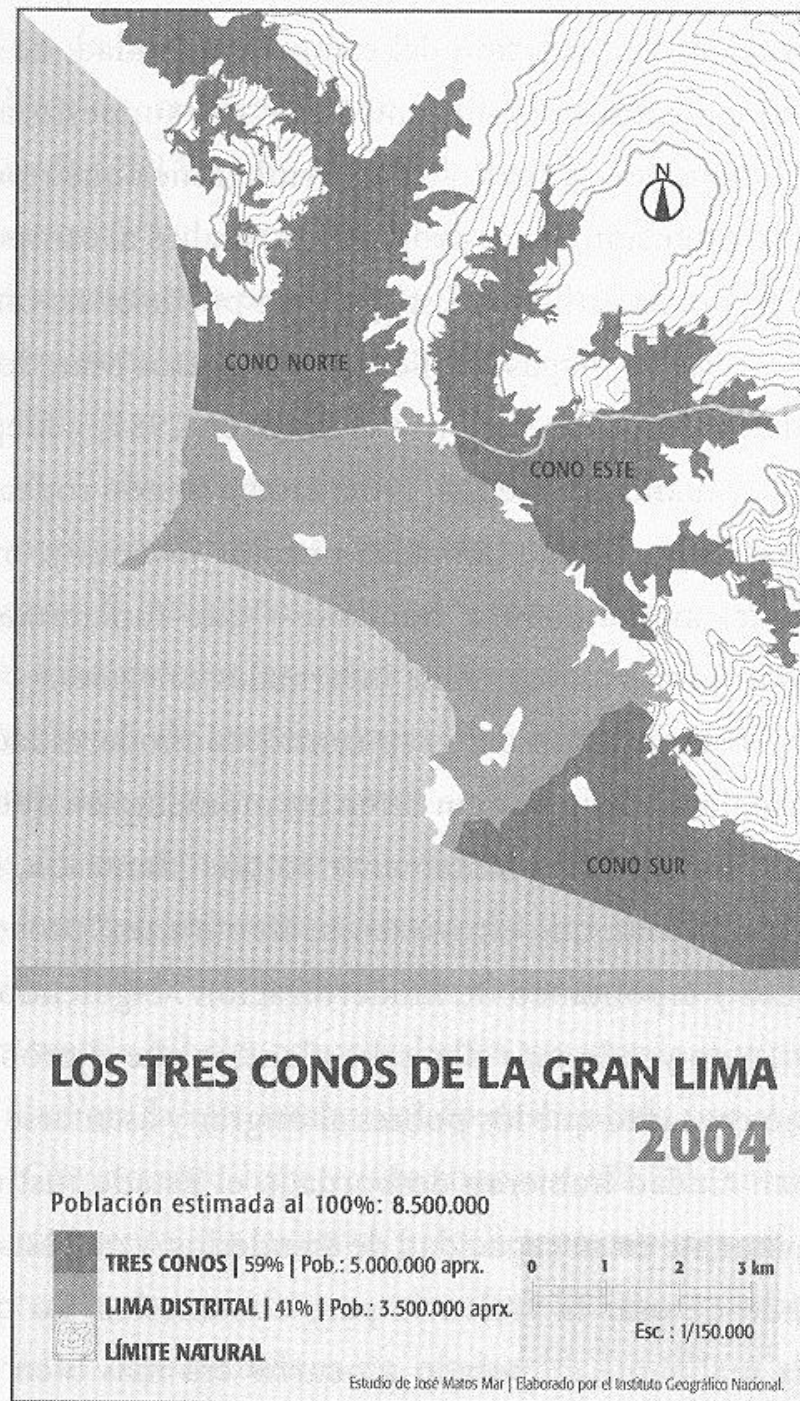
Dos autores, un antropólogo social y un economista, han contribuido a esta discusión con algunas tesis audaces y de gran intuición, pero sin abarcar toda la complejidad de las nuevas estructuras. Sus limitaciones son entendibles debido al momento en que reflexionaban, pues en medio de la crisis era difícil prever la conformación de una economía delictiva, y también por compartir una visión optimista de la historia que los lleva a considerar posible la modernidad. Ambos publicaron libros que se escribieron a mediados de la década de 1980, en el preciso momento en que la búsqueda de la modernización no andaba bien y habíamos entrado, todavía sin saberlo, por un desvío.

Los análisis de la informalidad realizadas por José Matos Mar desde una perspectiva antropológica progresista -la migración andina y la atención estatal a sus demandas- y los de Hernando de Soto desde una perspectiva económica neo conservadora -el empresariado urbano informal y la necesidad de fortalecer el mercado- tenían en común notar ciertas anomalías y mantener una esperanza de “integración” y “formalización” centrada en los pobres. Esa esperanza no se ha concretado y las anomalías han crecido. Lo importante de ambos autores es su audaz acercamiento a la nueva realidad. Sus aportes, en particular sus conceptos de desborde popular y sector informal, nos brindan una base de

partida para seguir avanzando en una interpretación que goza de la ventaja de reflexionar algunas décadas después y dar un paso más para hablar de desorden popular y sector delictivo.

Gráfico 3. Las barriadas de Lima y el desborde popular, según Matos Mar, 1981-2004.





Fuente: José Matos Mar. 2005. *Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, pp. 151-153.

En su libro *El desborde popular y crisis del Estado*, Matos Mar revela anomalías de la modernidad peruana al observar el desordenado ya veces violento crecimiento urbano de los conos de Lima. Este proceso inesperado fue

fruto de la migración del campo a la ciudad, de las ciudades menores a las intermedias y, por supuesto, a la capital; también de la explosión demográfica que resultó de la extensión de los programas de salud al campo y para los pobres urbanos. Este proceso puede observarse en una serie de mapas publicados por Matos Mar, donde, al momento de escribirse el libro, en 1981, Y luego, en 2001, cuando se reedita, Lima estaba siendo rodeada por barriadas -luego llamadas pueblos jóvenes y, más adelante, asentamientos humanos- que funcionaban con economías mayormente informales e ilegales.

Esta invasión del gran centro de modernidad y la formalidad del país ocurría en un momento en que la economía marchaba lentamente, lo que planteaba, según Matos Mar, que estuviésemos frente a un “proceso insólito y espontáneo de modernización”. Siguiendo al autor, pero yendo más allá, cabe plantear que el problema no era tanto que los pobres al migrar y asentarse en la gran ciudad hubieran desbordado el Estado institucionalmente en su capacidad de atenderlos, y que estaba tentado de usar la violencia para contenerlos. Lo que había realmente empezado a ocurrir era más bien un desborde de la legalidad o, si se quiere, un desorden popular, que había superado al Estado hasta arrinconarlo, haciendo que otras economías, con sus élites respectivas, que eran invisibles -salvo para los propios habitantes de las barriadas o conos- encontraran su propio nicho y operaran a pesar o gracias a la desidia o inoperatividad del Estado. Al mismo tiempo se iban alojando economías delictivas mezcladas con la informalidad, que terminarían creciendo y, según sostenemos en este ensayo, formando parte integral de la matriz institucional del país.

Cabe un comentario final al aporte de Matos Mar. La cuestión central no era tanto que el Estado hubiera atacado o intentado contener a estos “invasores”, porque, a fin de cuentas, cuando la represión fue inservible como muro de contención, el Perú oficial se acostumbró a vivir con ellos en su propia sede, en Lima y en todo el país. En ese sentido, no ocurría un verdadero “proceso de modernización”, como sostenía el autor, sino un cambio de una matriz con pretensiones de modernidad formal a una matriz híbrida y contrahecha, porque la institucionalidad era la que estaba siendo desbordada

por el pueblo. Obviamente, hace veinte años era difícil de entender este concepto. No existían precedentes que sirvieran de referencia, ni un enfoque realista que indicara que tal posibilidad esperanzadora de modernidad estaba negada. Aquí planteamos que la idea del desborde de Matos Mar, su principal aporte, hay que aplicarla para analizar esas otras dos economías y poder plantear cómo enfrentar el desborde de la legalidad, del orden que el Estado representa en la sociedad y el mercado, más que el Estado en sí mismo y su relación con los pobres urbanos.

La otra contribución, igualmente interesante, es la Hernando de Soto, autor de *El otro sendero*, obra de vuelo nacional e internacional, suerte de manifiesto neoliberal en defensa del mercado. Al igual que Matos Mar, De Soto discutía también el nuevo Perú de la crítica década de 1980, descubriendo la existencia de una vibrante economía informal. La concebía como mercado y no como otros investigadores habían sostenido antes, un mero sector de refugio aparecido en la crisis. Este “sector informal” se expresaba territorialmente en la existencia de barrios, mercados y actividades manejados por pequeñas unidades productivas no registradas, que se había abierto paso creando su propia economía de mercado. El fenómeno ocurría, a pesar o gracias a las barreras de entrada que De Soto atribuía al egoísmo de los formales y no a una mera tradición legalista y burocrática. Esa idea del pequeño productor informal dinámico que vende en las esquinas o los mercadillos es clave porque supera la noción de informalidad pasajera o accidental y ve más bien una estructura económica paralela a la formal. También la idea de las barreras de entrada es importante, aunque las causas, como se sugiere líneas arriba, pueden ser varias y nada conspirativas, en tanto a los informales más que combatirlos se los ignoraba. De Soto, además, no consideró el hecho de que hayal mismo tiempo complementariedad y oposición entre lo formal y lo informal, que en los propios espacios informales emergentes existían grandes empresarios y que, finalmente, al lado de esa economía comenzaba a aparecer una tercera, la delictiva. Al atacar la formalidad populista cree que es el Estado de los formales el que margina a los informales, pero bien puede ser visto al revés, visión que se acentúa si uno incorpora la ilegalidad. Sin embargo, su aporte consiste en señalar claramente la existencia de una brecha vertical, al darle a la informalidad

condiciones estructurales de sector. El economista dio un primer paso para ver a la informalidad y la formalidad como estructuras socioeconómicas complejas y diferenciadas con intereses definidos y mecanismo de defensa de los mismos.

Esas son las ideas que para fines de nuestra discusión conviene resaltar, de tal modo que estamos ahora listos para hacer un breve señalamiento de las tres economías, empezando por la más vieja y la más amenazada, la formal, aquella que debió crecer, extenderse y predominar como expresión vital de la modernidad. Advirtamos que, como se habrá notado, nos apoyamos en Thomas Hobbes para reflexionar sobre el Estado, para discutir los derechos de los habitantes y sus obligaciones, en la medida que si no se encuentra un equilibrio entre ambos, y predominan las violaciones, porque las carencias se ven como derechos a la transgresión, lo que hay es una situación anómala que conduce a la violencia: el hombre se está convirtiendo en lobo del hombre. La actual matriz institucional peruana está alobada.

La estructura formal

La economía formal la componen empresas y trabajadores que operan dentro de la legalidad. En ese mundo la propiedad está registrada, las empresas cumplen con los requisitos legales de autorización respectiva y los trabajadores figuran en las planillas. Por lo tanto, todos ellos -según las leyes y las normas vigentes-, y desde el punto de vista de las obligaciones, tema que nos preocupa, deben pagar impuestos y contribuir al financiamiento del Estado. Los agentes de esta economía, por tanto, están incorporados funcionalmente al sistema de modo que pueden ser fácilmente supervisados. Están dentro de un orden manejado por el Estado más allá de si su comportamiento es el ideal.

El sector formal está comandado por grandes corporaciones nacionales y extranjeras que hoy día son mayormente privadas. Antes, en la época de Velasco, había grandes empresas estatales; hoy han disminuido en número y poder y, en términos de poder económico, su condición es marginal. A medida que el proceso de globalización económica avanza, y que el Perú se abre al capital extranjero, quienes las compran son los grupos de poderes económicos

nacionales, los grupos extranjeros de países vecinos o las grandes empresas multinacionales (EMN). Por eso, como se observa en el cuadro 3, las corporaciones privadas gigantes comandan la economía formal.

Cuadro 3: *Ranking* de treinta primeras empresas ordenadas según volumen de ventas (en millones de nuevos soles).

Ranking	Empresa	Tipo de empresa o de grupos nacionales o latinoamericanos	Ventas	Empleados
1	Telefónica	EMN	4.238.284	5.325
2	Refinería La Pampilla	EMN	2.793.487	334
3	Southern Peru CC	EMN	2.040.378	4.432
4	Minera Yanacocha	EMN/G. Benavides	1.639.300	n.d.
5	Occidental Petroleum	EMN	1.511.552	508
6	Perupetro	EMN	1.463.540	n.d.
7	Alicorp	G. Romero	1.463.540	1.565
8	Mobil Oil	EMN	1.400.422	176
9	Shell	EMN	1.025.615	134
10	Luz del Sur	EMN	940.446	651
11	San Ignacio de M.	G. Arias	931.065	1.661
12	Cargill Perú	EMN	923.665	43
13	Backus	G. Bavaria (Colombia)	895.905	n. d.
14	Edelnor	EMN	890.361	772
15	Peruana de Combustibles	Nacional	854.594	53
16	Barrick	EMN	852.220	n. d.
17	Ferreyros	G. Ferreyros	682.462	1.340

Ranking	Empresa	Tipo de empresa o de grupos nacionales o latinoamericanos	Ventas	Empleados
18	Molinos Mayo	EMN	661.333	1.984
19	Gloria	G. Rodríguez	659.160	850
20	GyM	G. Graña y Montero	656.275	660
21	Química Suiza	EMN	630.731	980
22	Repsol YPF	EMN	620.923	24
23	Santa Isabel	EMN	590.187	2.537
24	Nestlé	EMN	553.367	237
25	Procter & Gamble	EMN	541.768	353
26	Saga Falabella	G. Falabella (Chile)	535.511	n. d.
27	Refinería de Zinc-Cajamarca	EMN	524.867	544
28	Consorcio Minero	EMN	513.246	85
29	Minsur	G. Brescia	488.619	418
30	Cementos Lima	Familia Rizo Patrón	485.050	345

Fuente: Lanota. Compañía de Colombia, 19 de abril de 2004. <http://lanota.com/cifras/pe/real>. Elaboración propia.

Al año 2000, existen más empresas privadas y menos Estado, situación

que no solo continuará sino que probablemente se reforzará en los años siguientes. Debajo de las grandes corporaciones existe un numeroso segmento de pequeñas y medianas empresas que son formales y que dan empleo a la mayoría de trabajadores. Mientras las grandes producen mucho y emplean poco, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son lo contrario. Hacia 1994, y según lo que deja ver la rigurosa estadística de empresas de la Sunat, existían tan solo 5.952 “empresas grandes” -desde el punto de vista fiscal- y una enorme base de empresas formales de 1.294.918 medianas y pequeñas.

La economía formal es “la más legal”, aunque, insistimos, sería mejor fijarse en los comportamientos para ver en qué medida se cumple con su responsabilidad hacia el todo social y aspira a los beneficios de una modernidad inclusiva. En ese sentido, se la debe caracterizar como la menos transgresora, en tanto no hemos superado las viejas divisiones entre ricos y pobres, y el abuso y desigualdades institucionales a que da lugar, que perpetúan la exclusión social, esa vieja brecha vertical que da origen a abusos gracias a la legalidad en condiciones de asimetría de poder. Que estén dentro del sistema no quiere decir, particularmente para los que tienen poder, que no puedan abusarlo o aprovecharlo. La formalidad da poder y, por lo tanto, privilegio, pero sobre todo para aquellos que lo concentran, las élites económicas y los políticos de turno.

Nótese que el impuesto a las ventas y el selectivo al consumo, sobre todo, la gasolina, lo pagan todos, siendo una carga pesada para los más pobres, mientras que el impuesto a la renta, que sintomática y lamentablemente en el Perú es el más débil en cuanto a recaudación, se obtiene de la formalidad. Siendo la formal solo una parte de la economía, la recaudación es menor, lo que obliga al Estado a endeudarse o cobrar más impuestos al resto, es decir, a los consumidores pobres, que son la mayoría, y que en este caso sí quedan atrapados en la red de impuestos del Estado.

¿Qué tanto peso tiene la formalidad comparada al resto? No es fácil responder a esa pregunta, pero si nos fijamos en el empleo formal a nivel nacional notamos que está en un poco más de 30%. Es bajísimo. Según Julio Gamero, que cita un estudio de Carlos Casas y Gustavo Yamada, el “empleo

adecuado” a nivel nacional de 2001 a 2004 oscila de 28 a 29%, y en Lima Metropolitana, el más formal y rico de los espacios económicos del país, de 40 a 35%. Obviamente, el resto -en la medida que el Estado no protege a los desempleados, que sufren sin ayuda la falta de ingresos- tiene que estar operando, es decir, trabajando regularmente, en las otras dos economías porque la alternativa es sufrir de hambre o irse del país en busca de otros mercados de trabajo¹.

Como se ha sugerido, el sector formal no vive apartado u opera aislado, sino que tiene múltiples relaciones específicas con el resto. Uno de sus nexos más importantes con la economía informal y delictiva deriva de su posición monopólica o monopsómica en la economía. En la punta de la pirámide existen bancos, empresas de seguro, grandes industrias y empresas de servicio, siendo sus clientes todos los peruanos, sin importar su legalidad. Estos gigantes por ser formales operan legalmente y se apoyan en ella aprovechando las asimetrías del poder, tanto nacional como internacional, al punto que en algunos casos generan y mantienen algunas barreras de entrada a la formalidad, tan asfixiantes que, aun sin buscado, generan oportunidades a las otras dos economías.

Hagamos referencia, por la importancia que tiene en el consumo, al caso de los royalties y marcas, que les permiten un sobreprecio a las EMN o, para citar otro importante que tiene también que ver con corporaciones nacionales, las normas de creación de entidades financieras. Son tan difíciles de cumplir que

¹ Gamero, Julio. “Empleo en el Perú”. Diagnósticos y propuestas para el próximo gobierno. Economía y Sociedad, nro. 59, CIES, marzo de 2006: 14. En la región andina, el porcentaje de desempleados al 2004 oscila entre 8,7% (Bolivia) y 15,1% (Venezuela), estando Colombia en 15,4%, Ecuador en 11 % y el Perú en 9,5 (ver Comunidad Andina de Naciones, “Principales indicadores de la Comunidad Andina de Naciones: 1994-2004”. Lima: Comunidad Andina, SG/de 123, julio de 2005. En todos los países andinos se calcula que la informalidad pasa de 50%, siendo el más bajo Venezuela con 52,2%, y el más alto Bolivia con 67,1%, estando Colombia en 59,9%, Ecuador en 57,6% y el Perú en 58% (El Comercio de Lima, 4 de setiembre de 2005: 6).

solo los grandes capitales pueden acceder a ella. Ese último es un aspecto. de la formalidad que -por ejemplo en las discusiones del mercantilismo que empezara a discutir De Soto, una noción que ve la formalidad como abuso de unos pocos intereses- no se ha tomando muy en cuenta.

También en lo formal están los medios de comunicación de masas, que tienen llegada a ese conjunto heterogéneo de actores sociales y económicos y que lo atiende, entretiene o informa, respondiendo a las claves culturales del todo. De allí que haya asimilado y contribuido a reforzar la cultura de la transgresión en sus emisiones diarias, sean periodísticas, radiales o televisivas. Los medios se han acharado y ahora, quizá sin quererlo, generan las condiciones para reproducir y expandir la transgresión.

Una breve reflexión sobre las diferencias de formalidad con el Perú de ayer viene al caso. Las clases sociales en el periodo precrisis de las décadas de 1970 y 1980 estaban organizadas en función al trabajo: el campesino dependía del patrón, del administrador o del capataz; el obrero, de los supervisores, del gerente y de los dueños de las acciones. Hoy en día el sector formal es mucho más pequeño, no solo por los avances de las otras dos economías. Esa limitación se evidencia en el hecho de que la gran empresa genera poco empleo. Es intensiva en capital y “grande” en el sentido que abastece al conjunto del país, lo que significa otro tipo de articulación. Las corporaciones emiten sus mensajes y programas a todos, venden los seguros a los taxistas, sean formales o informales, dan crédito, instalan teléfonos y redes de energía, y ofrece a los consumidores nacionales productos en sus supermercados. Hoy, buscando al .consumidor, se han trasladado a las “zonas marginales”, como los supermercados del Cono Norte de Lima. Entonces, la vinculación con estas multitudes, definidas así por ser menos que clases sociales propiamente hablando -otra vez la metáfora del triángulo sin base viene al caso recordarla-, es por el consumo. Esta articulación principal por el lado del consumo y no del trabajo, como era antes, en el orden tradicional, o cuando el cambio hacia una economía urbano-industrial recién empezaba, plantea una serie de problemas. Nos indica que estamos ante una gran debilidad estructural y un novedoso conjunto de problemas sociales. Todo ello tiene que ver con la pregunta que nos

hiciéramos: ¿qué hacen los que consumen gracias a los formales pero no encuentran trabajo en el sector formal, sea en el Gobierno en sus tres niveles o en el sector privado en su conjunto?

La estructura informal

La economía informal está constituida por empresas y trabajadores que operan en una zona institucional claroscuro. No es que sean ilegales sino que muchas de sus operaciones no son legales. Su nivel de transgresión es limitado. Además, la mayoría aspira a la formalidad sin barreras, intención sana. Se trata de agentes sociales que no han cometido un delito claramente lesivo a la propiedad y a la persona. En el caso de la propiedad, y esto lo ha señalado bien De Soto, una buena parte no está legalizada, en tanto sus viviendas, instalaciones y puestos de trabajo fueron producto de invasiones, seguidas de procesos de legalización que se encuentran en distintas etapas de formalización. Este ciclo de entrada a lo formal no acaba nunca, porque vuelve a iniciarse en la medida que siguen las invasiones, lo que hace que lo informal se reproduzca y crezca. Los ambulantes, por ejemplo, empiezan vendiendo en ciertas zonas urbano-marginales, luego, al generar una masa crítica, se forman como mercados informales o “zonas liberadas”, hasta que, como resultado de conflictos o negociaciones con el municipio, terminan trasladándose a un mercado estable y el gobierno local vuelve a tener control espacial sobre la “zona recuperada”, por lo menos por un tiempo². En la medida que el mercado de trabajo es limitado, y los gobiernos siguen siendo débiles y corruptos, otra generación de informales, en el mismo lugar o en uno cercano, reinicia el ciclo.

En el campo, la situación es también complicada al dividirse la propiedad sin registros adecuados y por ocurrir invasiones o colonizaciones informales, proceso particularmente visible en el caso de terrenos que se preparan para ser cultivados, sea eliminando el bosque -en la selva- o con nuevas irrigaciones -en la costa- o En esta economía la propiedad puede ir pasando de manos a propios o extraños sin un documento oficial de por medio que especifique que tal persona es la propietaria de tal casa o de tal parcela, lo cual bloquea o limita el

² Ver, al respecto, el libro *Alternativa y Deseo, ¿De ambulantes a empresarios?* Lima, 2001.

mercado de tierras y propiedades, y deprecia su valor. Sobre este punto, De Soto ha abundado teóricamente en *El misterio del capital*, su segunda obra.

En esta economía las empresas son informales: no están registradas. Los trabajadores no aparecen en planilla. Como no tienen contrato, están sujetos a un régimen abusivo de obligaciones y, si algún derecho tienen, se rige por la costumbre, no por la ley. Ese aspecto representa un problema social por el lado del trabajo, aspecto que no discutieron De Soto y Matos Mar, porque constituye otro mecanismo de explotación, peor incluso que el formal. Un registro, primer paso en la cadena de formalización, da lugar a obligaciones y también genera derechos. Los contratos laborales serán un costo, pero dan lugar a protecciones jurídicas.

En el caso de la informalidad, el síntoma más visible de su existencia y vitalidad es el comercio ambulatorio, especializado en cierto tipo de productos que son vendidos mayormente en los mercados informales en locales o en las calles, esquinas y carreteras de todo el país. Se trata de un ejército de vendedores que abastece principalmente a los pobres. Detrás de ellos, en las sombras del anonimato, operan, según los productos, grandes proveedores. El origen legal de lo vendido es variado: pueden ser formales, informales, de contrabando o simplemente robados. El ejército informal de comercio venden entonces parte de lo producido por las dos otras economías aparte de la suya.

Esa constatación es visible en el caso del contrabando y las diversas modalidades de lo que se ha dado en llamar piratería. El hecho de que la formalidad se atrinchera en los derechos de propiedad y la importación, o importación o fabricación “exclusiva” de marcas y productos, hace que tengan un fuerte sobreprecio. Es el poder de las grandes corporaciones para defender los derechos que mantienen su renta tecnológica o de marca lo que abre la posibilidad de un mercado negro.

En la medida que en el Tercer Mundo no existen los ingresos para pagar esa renta, pero sí desean adquirir el producto porque están expuestos a la propaganda comercial y prestigio de sus marcas, surgen otros abastecedores.

La renta la pagan quienes pueden pagarla: las élites y las empresas de las zonas de formalidad de altos ingresos. Las copias o reproducciones las compran quienes no pueden, sobre todo en aquellos países, como el Perú, fácilmente penetrables a las fuerzas que operan los mercados negros internacionales.

Si uno indaga un poco más las jerarquías descubrirá a grandes empresarios que componen una burguesía informal. Son operadores que la Sunat u otro organismo no los detecta o que, habiéndolos identificado, hace como que no existen, debido a que, gracias a sus mecanismos de defensa, han neutralizado o desbordado la capacidad operativa de los aparatos de sanción y control del Estado. Un caso paradójico es que en la misma avenida Inca Garcilaso de la Vega, donde está el local principal de la Sunat, existen a menos de tres cuadras varios centros comerciales dedicados a la venta de softwares y filmes pirateados. En ese caso, más que invisibles, estos operadores son ignorados. Se mantienen así por la desidia del Estado, literalmente desbordado para controlar a esta economía, pero también por efecto de la coima.

De ocurrir operativos represivos, esta burguesía informal moviliza a sus trabajadores y proveedores, y, si es detectada, afirma ser como todos los demás: pobre. Tal argumento tiene un fondo de razón mezclado con la necesidad de disfrazarse. Vienen de la pobreza, ese es su origen, probablemente conviven con ellos en los barrios menos acomodados, debido a que su cultura es provinciana o popular; pero, desde el punto de vista económico, son emergentes. En su sector respectivo forman una clase alta. Sociológicamente son gente de éxito que ostenta otra condición por haberse convertido en patrones, mandamases, pero no como los formales, descritos como comechados porque no se matan trabajando.

Al respecto conviene citar una investigación. El autor tuvo la oportunidad de estudiar el Mercado Mayorista de Lima en La Parada el 2002 Y constató que los 1.549 mayoristas y los 3.098 minoristas estaban organizados según los productos que compran y venden -cebolleros, paperos, maiceros, etc.-. Esta investigación fue luego entregada a la Cepri Lima bajo el título Estudio de impacto socioeconómico del proyecto Gran Mercado Mayorista de Lima (octubre

de 2002). En ese viejo, decrepito, pero todavía gran mercado, se forman los precios de los principales productos agrícolas que rigen en todo el país. Estos comerciantes están en cierta medida formalizados, registrados en el mercado municipal, pero su situación dista de ser ordenada, mejor dicho “se han informatizado”. A veces sus permisos han pasado a las nuevas generaciones, han caducado o alquilan su espacio a otros, es decir, transgreden. Para hacer frente a la competencia, participan en el comercio ambulatorio de extramuros e incluso tienen locales informales o puestos en otros mercados de Lima y provincias. No faltan casos donde les faltó prevenir y han sido gradualmente desbordados por otros informales que se instalan en nuevos mercados informales en los conos o en el Unicachi.

Los trabajadores del mercado mayorista, el otro gran grupo social de La Parada, son informales que operan con los comerciantes, sobre la base de arreglos verbales. Curiosamente, se han sindicalizado, teniendo una federación registrada en una central, y hasta asesores legales. Debido a su capacidad de presión social, son reconocidos por el Gobierno a pesar de no tener contrato para reclamar algún derecho. Es una curiosa situación que indica el claroscuro institucional donde operan: los comerciantes formales se informalizan para evadir la ley y sus obligaciones y operar en el próspero sector informal y los trabajadores informales se intentan formalizar para reclamar derechos.

Tal situación nos sugiere que en la informalidad quienes ganan más con la transgresión son las élites y quienes pierden más son los pobres. El problema está en que la sociedad no les ofrece alternativas, lo que genera una curiosa solidaridad en la llamada “familia del Mayorista”. Cuando se hizo el estudio de ingresos, a pesar de que había una gran reticencia por dar la información al encuestador, se constataba que de unos 27 grandes comerciantes que manejan gran parte del abastecimiento de Lima existía un grupo pequeño ubicado en el “estrato A” de más altos ingresos en el país. Esa es, precisamente, la burguesía del sector informal del mercado de abastos, pero opera no opuesta sino conjuntamente con “sus trabajadores”.

Cuando uno observa a los grandes mercados informales del resto del

Perú, por ejemplo, el Mariscal Castilla de Arequipa o a los gigantescos mercados informales de Trujillo, Chiclayo, Juliaca -lleno de contrabando-, todos los agentes económicos aparecen como vendedores ambulantes modestos. Sin embargo, probablemente los gremios, que son su escudo de defensa frente al abuso, la delincuencia, el Estado y el municipio, están manejados o dirigidos por esos patrones o burgueses informales. Parte de su poder es financiar reuniones y marchas, hasta llegar a movilizar en las calles a su mano de obra para impedir, por ejemplo, que ingrese la Sunat, se construya un nuevo mercado mayorista o se les intente reubicar o reformatizar. Al respecto, es interesante cómo en el 2001 un grupo de comerciantes informales de La Parada liderado por Herminio Porras, experto invasor de terrenos, y en conexión con algunos comerciantes del Mercado Mayorista, organizó una invasión al local municipal de Santa Anita para apropiarse del futuro local del Mercado Mayorista, cuyo valor es de varios millones de dólares. Herminio Porras estuvo en la cárcel, pero su ejército de matones, vigilantes, comerciantes y ocupantes de Santa Anita continuaron en posesión del local hasta ser desalojados el 2007. La batalla de la Sunat es una de las muchas que se libran día a día entre la formalidad y la informalidad, lo que indica que muchas veces la que pierde o termina cediendo -abrumada por la falta de recursos, de políticas, o neutralizada por las coimas o la necesidad de evitar conflictos sociales- es la formalidad. Pero también cuando entran a tallar los intereses políticos.

Es interesante anotar que cuando la Sunat empezaba a mejorar su accionar a partir de la gran reforma de 1992, algunos grandes empresarios trataron de convertirse en medianos, y varios medianos en pequeños, o se informatizaron, para que el radar institucional del Estado en materia tributaria no los detectara. Si estaban, por ejemplo, en Miraflores, se cambiaban de dirección fiscal y pasaban al Cono Norte, o aparecían en provincias, para así solo cumplir con el mínimo de obligación tributaria. Algunos, como se ha señalado antes, han pasado a la informalidad y eso en parte porque los impuestos son una enorme barrera de entrada, sobre todo el Impuesto General a las Ventas, cuya tasa de 19% es punitiva. En el caso de los mercados informales, llegó a registrarlos y hacer que emitieran documentos de venta, ejerciendo una fiscalización estrecha, hasta que, por razones políticas, el Gobierno de Fujimori ordenó que la Sunat se

replegara. Con los mercados de frutas y de productos agrícolas ocurrió algo parecido en la misma época. Las marchas de los comerciantes para impedir que se les cobrara impuestos hizo retroceder al Estado poco antes de las elecciones de 1995 y luego el frente de patrones y asalariados informales batalló con ayuda del gobierno central contra la Municipalidad de Lima para impedir la modernización del Mercado Mayorista de Lima.

La economía informal no es solo una economía de pequeña escala, sino todo un sector internamente diferenciado: con cientos de miles de “trabajadores” y manejada por grandes proveedores y vendedores que prefieren pasar desapercibidos mezclándose o apareciendo como pequeños para defender mejor sus intereses. Con ellos el choque con el Estado y los municipios puede llegar a enfrentamientos ya estallar en conflictos, pero es potencialmente corregible en la medida que la gran masa se beneficiaría de una formalización por adquirir derechos y certidumbre en su modo de vida, siempre y cuando el costo de formalización sea aceptable. Lo difícil es separar a los trabajadores de los patrones informales que los usan como fuerza de choque y hacer que los políticos no vean en estos casos una oportunidad de colusión.

La estructura delictiva

La economía del delito ha crecido espectacularmente de crisis en crisis. Al principio su dinámica fue anticíclica, lo que hizo que se la tolerara socialmente porque ofrecía alternativas de empleo e ingreso, pero luego, con más alzas que bajas, se estableció permanentemente al pasar el ciclo recesivo, escondiéndose en medio de la bonanza exportadora.

Este cambio cuantitativo y cualitativo de lo delictivo se inicia a fines de la década de 1970 y explota en la década de 1980, justo cuando el Estado llegó a su más alto punto de debilidad institucional. Una posible interpretación es que: 1) la crisis prolongada y 2) el debilitamiento del Estado dieron alas al desarrollo de destrezas ilegales a gran escala. Con el paso del tiempo, al prolongarse esta terrible situación, se fueron dando las condiciones para una “acumulación originaria del capital” pirata. Conviene añadir que, en la medida que se trataba de

productos prohibidos, varios mercados negros florecieron precisamente porque no existía muro estatal que los contuviera, sino más bien lo contrario: estaba dispuesto a coludirse, caso particularmente visible con la erupción de la corrupción de la década de 1990 (Portocarrero, 2006).

Esta economía subterránea constituye uno de los ejes establecidos sobre los cuales gira el desarrollo de este otro Perú. Ocurre así, cabe anotar, a pesar de un temporal retroceso en la producción de coca para el mercado de la droga en la década de 1990. Fue un ciclo inducido externamente debido a que Colombia desarrolló sus propios cultivos de coca. Sin embargo, en ese mismo periodo surgió y se expandió el contrabando y la piratería. Luego, al variar las condiciones internacionales de la cadena de la coca en la primera década del siglo XXI, la coca volvió a cobrar impulso y a pasar a una fase más avanzada, al aumentar la capacidad nacional como productor de cocaína. En esa dinámica, varias actividades delictivas, aparte de las pequeñas -que también se extendieron como una mancha de aceite de la violencia-, fueron armándose como cadena productiva.

El estudio de la coca, la principal economía delictiva, indica lo difícil que es entender y combatir este problema. En ese sentido es importante verlo no como si fuera una estructura separada sino que, siendo distinta, tiene una muy fuerte conexión con las otras dos economías y con los mercados negros internacionales. Esta gran complejidad hace que el Estado, al intentar controlarlo, tiene que activar y coordinar diversos mecanismos institucionales, tarea que resulta, como discutiremos en detalle más adelante, particularmente difícil.

Estos negocios delictivos violan la ley y, a diferencia del sector informal-que no hace daño a la propiedad ni a la persona, aunque la transgreda en ciertos aspectos-, atentan abiertamente contra el Estado y la sociedad, pues solo pueden operar sobre la base de violencia y corrupción. Gracias a esos dos perniciosos instrumentos, la economía delictiva prospera para, al mismo tiempo, intimidar o acoplarse a la estructura formal de poder. En ese sentido, no es enemiga per se del Estado, porque no quiere eliminarlo sino colonizarlo. No le

conviene operar abiertamente sin Estado. Por lo tanto, tiene que convivir con él neutralizando su capacidad represiva y aprovechando todas sus debilidades. Un caso que viene a la mente en otros territorios es lo que sucede en el sur de Italia, en Sicilia y su capital, Palermo, pero también en Nápoles, donde el crimen organizado se ha instalado hace siglos. Estamos en ese camino.

Las mafias o la lumpemburguesía que maneja estos grandes negocios delictivos se concentran en tres grandes actividades: el narcotráfico, el contrabando a gran escala y la piratería de productos y marcas patentados internacionalmente. La lumpemburguesía, al operar, y a diferencia de la burguesía informal, se disfraza muchas veces de formalidad. Su pretensión de clase alta se debe a que es mucho más rentable que la informal y puede ascender posiciones más cómodamente. Su escudo consiste en disfrazarse de riqueza para aparentar respetabilidad. Curiosamente, a veces llegan a ser buenos cumplidores tributarios: sus empresas son un disfraz para continuar manejando los grandes negocios ilícitos y pueden pagar sus impuestos con comodidad.

Esta economía, por tanto, es más peligrosa, no solo por ser delictiva, sino porque se camufla en la legalidad y contamina a la formal. Usa también a la informal, la explota como mecanismo de distribución de productos de contrabando o “pirateados”. En ese sentido, tiene fuertes y variadas conexiones con el todo.

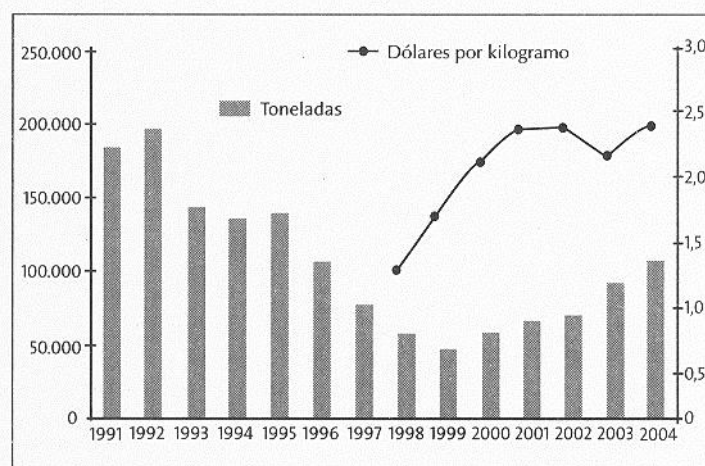
Coca y narcotráfico

En el caso del narcotráfico, el mayor problema actual es que, luego de una caída en la década de 1990, el Perú ha reincidido como productor de coca y, peor todavía, se ha convertido en un productor mayor de cocaína. Según la Oficina de Drogas de la ONU, el hectareaje de coca ha aumentado pero también hay otro cambio: el país pasó de producir de 160 a 180 toneladas métricas del año 2004 al 2005, de un total de 800 toneladas a nivel mundial. Además, está cada vez mejor conectado con los carteles mexicanos, que son las mafias que están reorganizando toda la cadena de la coca para liberarse de la influencia de

las mafias colombianas, las primeras en operar en el país.

La producción de hoja de coca se ha incrementado recientemente gracias al aumento de precios a partir del 2000, tendencia que se ilustra en el cuadro 4. Este aumento es visible sobre todo en las cuencas “liberadas” como el Huallaga, el Monzón, el Apurímac y el Ene, donde la acción policial es inexistente o muy débil. Es allí donde las mafias tienen presencia en los medios de comunicación locales, alcaldías y gobiernos regionales. Además, ejercen control regular de rutas para traer los insumos químicos y llevar la pasta y la cocaína a los mercados. Toda la cadena se articula y protege por sus mecanismos de corrupción y, cuando es necesario, la violencia.

Cuadro 4. Producción de hoja de coca y evolución del precio por kilogramo, Perú, 1991-2004.



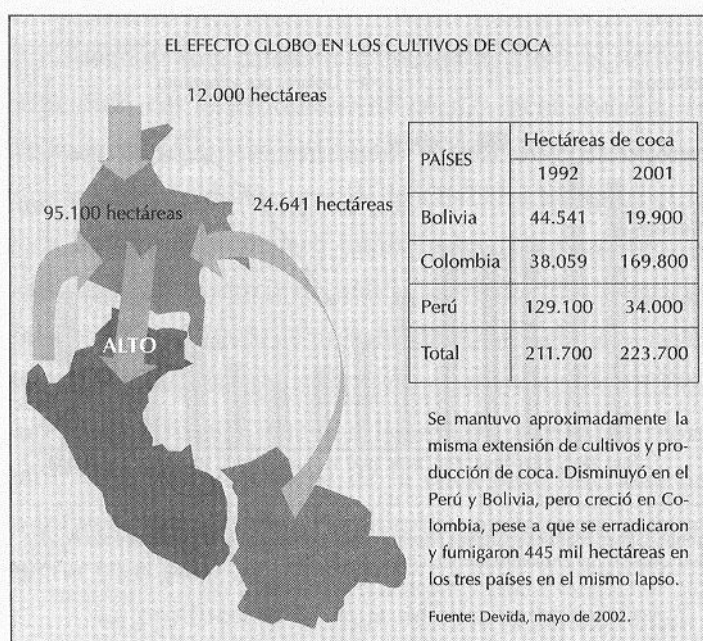
Fuente: Glave, Manuel y Cristina Rosemberg. *La comercialización de la coca en el Perú: análisis del comercio formal*. Lima: Grade 2005.

La respuesta del Perú a la mayor demanda de coca de los mercados internacionales se debe al llamado efecto globo, donde la demanda se equipara con la oferta según países cuando la acción de un Estado la hace reducir en uno, desplazándose a otro donde se la tolera. Devida, la organización del Estado peruano que debe coordinar la “guerra contra las drogas”, hace precisamente referencia a este efecto en el gráfico 3.

Mientras la producción descende en el Perú y Bolivia en la década de 1990, crece en Colombia, que se convierte en productor importante de coca y de cocaína.

En la década siguiente, luego del Plan Colombia apoyado y financiado por Estados Unidos desde el año 2000, el Estado colombiano arremete contra los productores de coca y cocaína. Se crean así las condiciones para que se traslade la demanda al Perú, donde el Estado baja la guardia y donde se produce cocaína en mayores cantidades. En todo el periodo, a pesar de los cambios relativos en cada país, las mafias de la droga se las han arreglado para incentivar a miles de campesinos y trabajadores a seguir abasteciendo al mercado de modo regular.

Gráfico 3. El “efecto globo” en el área andina: 1992-2001.

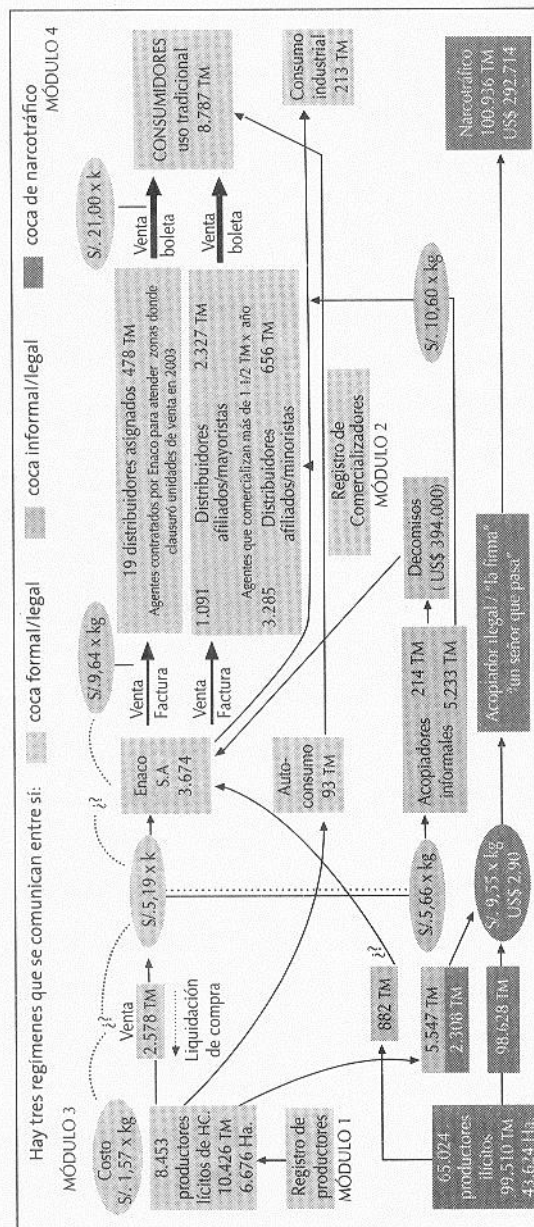


La complejidad alcanzada en el mercado de la coca se revela en el gráfico 4, elaborado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), la entidad del Estado que es dueña de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Este organismo ha hecho esfuerzos para estudiar el problema y revelar cómo las transacciones formales, informales y delictivas se dividen el mercado de la hoja de coca. Es un caso importante

porque, a diferencia de otras economías delictivas, es posible hacer estimados más precisos y ubicar a los distintos agentes.

Del total de producción, estimada en 101 mil toneladas métricas, el monopolio estatal de Enaco únicamente controla la compra y venta de 3.674 toneladas. El sector informal, que abastece al consumo tradicional y, por lo tanto, es la competencia de Enaco, maneja unas 5.233 toneladas; y el narcotráfico, que compra la coca para convertirla en pasta y luego en clorhidrato de cocaína, es el gran agente del mercado, en tanto maneja 100.936 toneladas. Este mercado de la coca, dividido según tipo de transacciones, también nos da una idea del número de familias campesinas involucradas en la producción. Según Fonafe, organización que cuenta con la ventaja de tener la base de datos de productores y registro de compra y venta de coca legal para uso tradicional, solo existen 8.453 productores legales mientras que los ilícitos llegan a un poco más de 65 mil. Si calculamos que se trata de familias de cuatro miembros en promedio, estamos frente a un ejército de productores que pasan los 100 mil.

Gráfico 4. Mercado de hoja de coca y transacciones formales, informales y delictivas.



* Consolidando la cantidad de coca para uso tradicional y la destinada al uso industrial 213 toneladas (bebidas, farmacología, mates), la demanda para uso legal es equivalente a 9 mil toneladas.

** Incluye 23.433 productores del PBE que autodeclararon 15.758 hectáreas, equivalentes al 36% del área cultivada que abasteció al narcotráfico en el año 2004. Tales productores han sido depurados del registro actualizado, porque en el periodo 2001-2004 no hicieron ventas a Enaco o solo efectuaron con Enaco transacciones esporádicas y de mínimo volumen.

Fuente: Fonafe: "Narcotráfico: problema y posibilidad" (2006).

En cuanto a la capacidad del Estado de usar la fuerza represiva para contener el poder de las mafias del narcotráfico, vale la pena mencionar que, a principios del año 2000, las confiscaciones de pasta representaban dos tercios y de cocaína pura, un tercio. En el 2005, al reorganizarse la cadena de la coca y la cocaína, la tendencia se ha revertido: ahora se decomisan dos tercios de cocaína y uno de pasta, indicio de que cada vez exportamos más el producto final. La consecuencia es que existen mafias con mayor dinero y, por lo tanto,

más peligrosas, en tanto corrompen más y pueden actuar con mayor violencia. Esta economía puede generar varios cientos de millones de dólares al año solo en lo referente al narcotráfico. Así, más miembros de la sociedad se van lumpenizando o interactuando acomodaticiamente con la economía delictiva y mayores espacios del territorio los manejan las mafias.

Cuando un fenómeno es fresco, las noticias periodísticas sirven para ilustrarlo: el 14 de abril de 2005 se decomisaron en Tacna mil kilos de cocaína pura; el 9 de junio de 2005, 470 kilos en Lima; el 1 de agosto de 2005, 300 kilos en La Oroya; el 9 de noviembre de 2005, 2 toneladas en Chiclayo, y en agosto de 2006, más de 3 toneladas en alta mar. En paralelo, han aumentado los niveles de violencia contra jueces, abogados y testigos, algunos incluso ajusticiados. Se han tomado decisiones judiciales cada vez más escandalosas cuando se procesan a los narcotraficantes, siendo particularmente significativa la baja condena obtenida por el cabecilla del cartel de Tijuana en febrero de 2007.

En cuanto a los distintos organismos y políticas que tratan de manejar este grave problema, el cuadro 5 revela la gran complejidad que tiene. Pone al descubierto que, aun en el supuesto de que el aparato de Estado tenga voluntad de actuar, o si se le dotan de más recursos -ese viejo reclamo burocrático que esconde problemas más graves-, sigue siendo muy difícil coordinar los distintos organismos del Estado, al mismo tiempo como para luchar en todos los frentes con cierto nivel de eficacia. El problema es más grande que su capacidad de acción y la cadena delictiva está perfectamente coordinada mientras los organismos del Estado no lo está.

Una lucha frontal y organizada representa entonces un gran reto, aun si el Estado tuviera voluntad de actuar y recursos, dos retos muy difíciles de superar. Estamos frente a un muy grave problema. Por sus dimensiones y nivel de rentabilidad -léase corruptibilidad- y violencia, no conviene ignorarlo.

Cuadro 5. Matriz sobre los aspectos económicos y políticos de la coca.

Aspectos económicos	Ciclo	Materia prima	Distribución	Insumos	Producción	Narcos internacionales	Consumo	Compañías	Adictos
Agentes		Cocaleros	Acopiadores	Industriales y comerciantes	Narcos nacionales		Campesinos		
Producto		Hoja de coca	Hoja seca	Insumos	PBC	Cocaína	Coca	Coca y cocaína	Cocaína y derivados
Estatus legal	Formal	Registrados	Enaco	Legal			Legal		
	Informal	Regulada y no regulada	Trueque/ ¿?	¿?					
	Ilegal	Regulada y no regulada	¿?	¿?	Criminales	Criminales			Criminales
Apoyo político	Organización popular	Federación/ Confederación	¿?	¿?	¿?	¿?			
	Partidos	Movimiento Etnocacerista/ otros	¿?	¿?	¿?	¿?			
	Congreso	Congresistas	¿?	¿?					
	Medios de comunicación	Rádios y periódicos locales	¿?	¿?	¿?	¿?			
Opinión pública	Apoyo/ ambivalencia	Apoyo/ ambivalencia	No sabe	No sabe	No sabe	Rechazo	Apoyo	Apoyo	Ambivalente
Políticas públicas	Legalización, erradicación, sustitución de rehabilitación, cultivos	Interdicción	Interdicción	Confiscación, represión	Confiscación, represión	Confiscación, represión			Represión/ Educación, campañas publicitarias
Entidades del Estado	Devida, otras	Enaco		Dinandro, Mitinci	Dinandro, Dicapi	DEA, Interpol	Enaco	Enaco	Cedro

Elaboración: propia.

El contrabando y la piratería

El contrabando de productos importados y la piratería o falsificación afecta tanto el campo como la ciudad, siendo particularmente fuerte en cierto tipo de categorías económicas. Según el cuadro 6, puede generar ingresos más de 900 millones de dólares anuales. No es, como comúnmente se cree, una actividad “hormiga”, de gente pobre que viaja a las fronteras y vende sus productos en el interior. Tampoco se limita a licores, cigarrillos y artefactos electrónicos; que no es sino la piel de la bestia.

El contrabando es una actividad a gran escala manejada por grandes mafias y que opera también en sectores como alimentos, medicinas, agroquímicos y metal mecánica, en la propia capital del país.

Sus productos se venden principalmente en los mercados informales, aprovechando el desorden y la falta de vigilancia. Está organizado a gran escala en los puertos y las fronteras, según el gráfico 6. Un caso poco estudiado pero importante es el contrabando en el Callao y la participación de agentes e instalaciones del propio Estado. El caso más conocido es el de la “culebra”. Se trata de un convoy de camiones que se organiza en esos dos centros de contrabando sudamericanos que son Paraguay y Bolivia, países, precisamente, de mucha mayor informalidad y pobreza, y con economías delictivas. La “culebra” opera por lo menos desde principios de la década de 1990 en el sur del país. El convoy viene lleno de contrabando desde Bolivia y luego pasa -a punta de coimas y amenazas- por la frontera, al otro lado de Desaguadero, entrando al Perú por Juliaca hasta llegar a otras ciudades, donde se tienen grandes depósitos y redes de distribución. Luego la cadena utiliza a los mercados informales, incluso los formales, para llegar a los consumidores.

Cuadro 6. La economía del contrabando y su efecto fiscal.

Sector	Unidades	Porcentaje del mercado	Ingreso en millones de dólares	Evasión en millones de dólares
Agricultura			112,4	31,5
Alimentos			152,9	41,8
Bebidas			43,6	19,8
Tabaco		40%*	64,7	45,3
Textil y confecciones			57,8	26,7
Calzado			104,1	17,0
Papel y químicos				
Agroquímicos		10%**		2,9
Caucho y plástico			11,9	60,2
Derivados del petróleo	70.000 galones al día***		115,1	33,9
Metalmecánico			138	308,47
Otras industrias			920,8	
Software y audio pirata***			80	

Fuente: *Caretas* (21 de agosto de 2003).

* *Caretas* (1 de diciembre de 2001).

** Andina. "Contrabando de agroquímicos adulterados podría afectar la productividad del agro" (21 de enero de 2007).

** Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. "El contrabando en el mercado de combustibles" (abril de 2006).

*** *La República* (4 de abril de 2007). La Alianza Internacional de Propiedad Intelectual recomendó el 2007 que el Perú se mantenga en "la lista de observación" de países con economías piratas.

Gráfico 6. Rutas del contrabando a principios del siglo XXI.



Fuente: *Caretas* (21 de agosto de 2003).

¿Quiénes manejan esta gran red de contrabando? Es obvio que no solo son pequeños agentes sino que detrás operan grandes empresarios, gente de muchos recursos y enorme influencia, a tal punto que se han hecho invisibles. No los vemos porque han enneguecido al Estado y a la sociedad, además a la prensa, que rara vez los identifica.

En el caso de la piratería, esta actividad destaca en productos como los libros, discos de música o de películas, los diseños de muebles y de ropa, la reproducción ilícita de marcas y logos, y el software, los programas para operar

computadoras. Al igual que el contrabando, opera libremente en mercados y ferias informales, incluso las formales, como las de Gamarra en La Victoria. No hay mayor información oficial sobre estas actividades, pero en alguna de ellas existe un dato revelador: 90% de los discos compactos importados terminan sirviendo para la reproducción ilegal. El Perú ha desarrollado esta industria imitando a los colombianos, mejorando su calidad, al punto que en países como Bolivia, el consumidor exige discos compactos peruanos, porque tienen fama de tener mayor calidad.

4. los orígenes del problema

Cabe preguntarse, aunque sea muy someramente, ¿cómo se ha llegado a esta situación de tener tres estructuras económicas paralelas, bien organizadas y con formas avanzadas de diferenciación y jerarquía social, con pesos variables en la producción y el empleo, y en la capacidad de acción y hasta de representación política?

Para empezar, un factor importante que condiciona el rumbo tomado es el crecimiento demográfico. No es una causa, sino un elemento que acelera la acción de los factores causales. A partir de la década de 1960 la población peruana comienza a crecer a una tasa cercana al 3% anual, y a migrar a las ciudades. Como resultado de ello, y por primera vez en nuestra historia, nos convertimos en un país urbano y hasta cierto punto, sobre todo en Lima, sobrepoblado. Según el Censo Nacional de Población en 1940, el país tenía 7,1 millones de habitantes y tan solo el 9,95% vivía en ese entonces en Lima. En 1993, la población creció rápidamente a 22,6 millones y Lima Metropolitana concentró el 28,4% del total (INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 1993). Hacia el 2007, debe haber llegado a un tercio del país.

Ahora, más de medio siglo después, la presión demográfica ha bajado, en parte porque los pobladores tienen un mayor nivel educativo -hay estudios que demuestran que a mayor nivel educativo menor número de hijos- y por la emigración, 10% de la población ha salido fuera del país. Pero la herencia de este proceso está con nosotros, sobre todo porque la influencia o consecuencia que tiene el predominio numérico de una mayoría son jóvenes pobres con pocas opciones en el mercado de trabajo formal. La explosión demográfica, a pesar de la válvula de escape de la emigración, es uno de los factores que interviene en agravar las condiciones del mercado de trabajo en el Perú, que se reduce en lo formal y crece en lo informal y lo delictivo. También las bases culturales, en tanto una nueva generación ha nacido en momentos que se socializan en un contexto de cultura de transgresión. Todo ello acelera el desborde del Estado y del mercado formal de trabajo, y de los viejos valores y reglas sociales de convivencia.

Un factor causal importante es la crisis del populismo, que se quiebra en medio de una situación difícil, prolongada, penosa, que indica lo difícil que fue terminar de realizar una transición hacia una economía abierta. La secuela de crisis ocurre desde fines de la década de 1980 a una economía de mercado. Empezó con la de 1978, siguió con la de 1983, luego vino la peor, la de 1988, que se prolongó hasta 1990. Cada crisis fue mayor que la otra, teniendo un costo enorme para el país y la sociedad. Fue alimentando procesos de violencia y deterioro institucional a todo nivel: en el Estado, la empresa y la sociedad civil. En esas crisis recurrentes la economía formal y el aparato político, la vieja normatividad y las costumbres se derrumbaron.

Ocurrió en el peor momento, justo cuando cada año más y más peruanos pugnaban con poca suerte por incorporarse al mercado de trabajo. Fue entonces que aparecieron tendencias contracíclicas, que aprovecharon la vulnerabilidad de la economía formal dirigida y la incapacidad de regulación social del Estado. Todo ello hizo desplegar las destrezas ilegales y la aparición de mafias y lumpen de alto nivel. Al estancarse el mundo formal tan profundamente no quedaba otra alternativa que autoemplearse, según cada cual pudiera “en lo que sea”. Es decir, primero en la informalidad, que apareció como una alternativa de trabajo -por ejemplo, para los trabajadores despedidos o para los recién incorporados a la población económicamente activa que no encontraban trabajo-, luego en la economía delictiva. Esta tercera economía se desarrolló en paralelo y poco a poco pero fue adquiriendo gran fuerza. No es coincidencia que en la década de 1980 creció a gran escala el narcotráfico, el contrabando y la piratería. Creció junto con la informalidad, indicando entonces un descontrol estatal, pero no quisimos o no supimos entender las consecuencias de su existencia, a pesar de la creciente criminalidad y corrupción.

Otro factor coadyuvante, que debilitó lo formal y obligó a buscar alternativas basadas en la transgresión para sobrevivir o acumular riqueza, se relacionó con una falla de modelos de modernización que, por diversas razones, no han podido proveer empleo masivo de calidad y, por lo tanto, reducir el tamaño de la informalidad y dotar al Estado de los recursos necesarios para que

rija su autoridad. Estos experimentos económicos, primero el populista-estadista de 1960 a 1980, luego el libremercadista, a partir de 1990, no han dado las oportunidades a los jóvenes trabajadores que buscan operar en la economía formal, sea en el Estado o en las empresas. Curiosamente, cuando finalmente se abandonó la política populista, y se pasó a una etapa de mercado libre, se dijo que ese era el momento para reducir la informalidad y para fortalecer a la economía formal con grandes empresas y con mayor legalidad. Sin embargo, la evidencia empírica señala que el modelo neoliberal puesto en práctica en el Perú -por la carga histórica, lo profundo de la crisis, y la manera cómo la élite neoliberal diseñó e impuso el modelo en la década de 1990- tampoco ha desarrollado la capacidad de dar empleo en números mayores, incluso a pesar de haber logrado superar la inflación y la recesión económica que caracterizó la década de 1980.

El tema de las debilidades del neoliberalismo peruano en materia de empleo se puede ver en casos particulares. En el caso de Antamina, una inversión de 2.260 millones de dólares, la mayor en la historia del país, el nivel de empleo directo que genera esta moderna corporación minera llega a los 1.400 trabajadores³. Minera Yanacocha, la gran corporación aurífera de Cajamarca, una de las más importantes del mundo, no llega a emplear más de 2.000 trabajadores, y si incluimos sus numerosos contratistas, solo dan empleo directo a cerca de 6.000 trabajadores en más de cien empresas locales⁴.

La gran empresa extractiva moderna predomina en nuestra economía formal sin crear gran empleo por ser intensiva en capital y también por operar con subsidiarias y contratistas. Finalmente, como esas empresas no funcionan articuladas con el resto de la economía, sino con la de sus países de origen, la falta de eslabonamientos hace que el peruano se quede sin mayores oportunidades de trabajo al no surgir a su lado un número de abastecedores en el mercado local. Paradójicamente, es la pequeña y la mediana empresa, también la microempresa unipersonal o familiar, tanto formal como informal, las que crean más oportunidades de empleo, sin llegar a un extremo de

³ Ver el portal de internet de Antamina: http://www.antamina.com/01_antamina/En_CMA.html.

⁴ Ver el portal de internet de Minera Yanacocha: <http://www.yanacocha.com.pe/ing/inversion.html>.

transgresión. Deben ser fortalecidas.

Cuando se consolidó la empresa privada formal moderna y no se desarrolló el empleo masivo, se ha limitado en paralelo la capacidad del Estado de generarlo, abriéndose así el camino a opciones alternativas fuera de la ley o fuera del país. Sintomáticamente, las tendencias al empleo no han cambiado sustancialmente entre el 2001 Y el 2005, periodo en el que se gozaron de condiciones de bonanza económica, con términos de intercambio altamente favorables -de allí que se duplicara el valor de las exportaciones más que el volumen físico-, a lo cual habría que añadir el fenómeno de las remesas o “migra-dólares”, más de 1.441 millones de dólares que ingresan al país directamente a las familias al 2005, habiendo sido solo 718 millones en el 2000⁵. A pesar de ello, ese otro Perú mantiene niveles similares de informalidad en el empleo y con una pobreza ligeramente menor al 50%. Parte del problema es internacional, ciertamente, y no podemos dejar de mencionarlo como un factor importante. Las condiciones de globalización económica generan una competencia de todos contra todos, lo que hace que existan más pobres en China y en India dispuestos a trabajar por menos ingresos que los del Perú. Al mismo tiempo, y como ya se ha señalado, las multinacionales han determinado un régimen de royalties y derechos de propiedad y marcas que encarecen los precios o que los sitúan a niveles inalcanzables para los consumidores pobres del mundo, ahora casi plenamente integrados a un mercado basado en dinero. En un contexto como el peruano, las multitudes de consumidores pobres, o incluso buena parte de la clase media, no pueden pagar esos precios. Esta protección a las rentas corporativas generan oportunidades en el mercado negro mundial que penetran con más rapidez en los países más débiles, especialmente allí donde se cuentan con destrezas empresariales ilegales, como el Perú.

⁵ Ver al respecto el estudio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). “Estudio de remesas en los países andinos”. Documento estadístico SGI 143 (marzo de 2006).

Existe una cuestión de debilidad del propio modelo económico internacional basado en la globalización, y también la manera brusca y extrema cómo se ha implantado en el Perú⁶, Parte del problema es conceptual, en tanto ha existido excesiva convicción con esta idea de que el mercado, identificado con las corporaciones, no necesita del Estado, pero se ha olvidado de su importancia social, de su capacidad de entender y regular el todo institucional. No extraña que al fallar el Estado y las corporaciones modernas en generar empleo masivo y de calidad, los que realmente contribuyen al país en materia de empleo son la base de la pirámide formal, ese mundo de pequeñas y medianas empresas, y también las otras dos economías. El problema no se corrige cuando el Estado, capturado por las élites corporativas formales en los aparatos burocráticos que manejan la economía, indiferente al resto del país, no crea las políticas y los programas como para que más y más empresas sean agentes competitivos exportadores y creadores de empleo de mayor calidad. Resulta alarmante que a12001 solo 2.191 empresas formales grandes y medianas representan el 96,8% de las exportaciones⁷. Se trata de un club muy exclusivo. No olvidemos que la informalidad impide que miles de empresas puedan participar en la actividad exportadora. Al no estar registradas, no pueden participar de las oportunidades del mercado mundial sino, muy probablemente, ser explotadas o aprovechadas por las formales que comercializan sus productos. En suma, tanto la manera cómo se ha aplicado este liberalismo en el país como las ventajas del capital a nivel internacional y una mayor competencia global de todos contra todos, incluyendo el trabajo, refuerza esas debilidades estructurales peruanas que se expresan en la emergencia y continuo desarrollo de tres economías.

Otro elemento que entra en juego es el mal gobierno, que, unido a los demás, termina por pintar un panorama sombrío para el desarrollo institucional del país. Con un Estado débil, debilitado y debilitable institucionalmente, la informalidad y el delito crecen prácticamente incontenibles. Insistimos en que el

⁶ Sobre este punto, y también para un análisis más detallado de la economía formal, ver del autor (2006).

⁷ Ver al respecto el reporte de la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa (Prompyme). 2004. "Documento de trabajo sobre los principales resultados hallados en la encuesta a los empresarios de Gamarra". Lima: Prompyme y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuadro 1, p. 8.

Estado es el principal muro de contención, pero no puede ni debe actuar solo. Requiere la colaboración de la sociedad civil, que no reacciona con fuerza en buena cuenta porque un segmento de ella está ahora inserto en las economías no formales. Más que recursos, insistimos, al Estado le faltan ganas de reforma y esta desidia tiene múltiples orígenes, siendo uno la coima y el otro el temor a crear problemas sociales. Se genera así una situación que podemos llamar de negligencia voluntaria. La economía delictiva solo puede crecer hasta convertirse en sector económico gracias o debido a un Estado central débil, y su existencia y dinamismo agrava el problema, pues, para existir, debe operar chantajeándolo con la violencia o comprándolo con la coima. A su modo, todas las economías han logrado formas de penetración del Estado y representación política, pero la más grave es la delictiva, porque ataca todos los niveles del Gobierno. En ese sentido, una de las mayores fallas es no considerar como principio fundamental que Estado y mercado tienen que ir de la mano. Lo que existe ahora es un mercado fuerte con un Estado débil y esa fórmula no funciona porque reproduce las viejas brechas verticales y deja a su vez que las nuevas horizontales crezcan.

Parte del problema con la informalidad, como con la economía delictiva -cuando se generan condiciones de mercado negro con prohibiciones y altos impuestos-, es la existencia de diversas barreras a la formalidad. De Soto hablaba, sobre todo, de las barreras burocráticas. Para nosotros el problema es más complejo y tiene múltiples aristas. Hoy en día, en plena época neoliberal, una de las razones por las que no se entra a la formalidad se debe principalmente a las deformaciones del sistema tributario que tiene una naturaleza regresiva. La estructura de la tributación está cada vez peor, y los altos impuestos generales no se deben, como en el pasado, a grandes déficits o caídas del ciclo económico. El periodo 2001-2007 ha sido de gran bonanza y prosperidad, al punto que ha subido la recaudación tributaria como porcentaje del PBI a más del 140/0. Sin embargo, en ese mismo periodo, los impuestos regresivos han aumentado. Particularmente grave es el caso del Impuesto a las Ventas (IGV), que ha subido un punto porcentual el 2003, estando ahora la tasa en 19%. A ello se añade el impuesto a las transacciones bancarias y el impuesto a la gasolina. Mientras tanto, ha bajado la tasa del Impuesto a la Renta, se ha

eliminado el viejo Impuesto de Solidaridad -que afectaba principalmente a las empresas- y se han mantenido múltiples exoneraciones y privilegios a las grandes empresas y los dueños de acciones. La paradoja es que cuando el país estaba en condiciones de mercado excepcionales, que no se van a repetir fácilmente, ni prolongar por mucho tiempo, se mantenga o agrave su carácter reproductor de desigualdades y de penalización de los pobres.

En el caso del contrabando y la informalidad, una forma de eliminar esas barreras de entrada es bajar las tasas, para que no sean punitivas, y esa menor recaudación se puede compensar ensanchando las bases de contribuyentes al combatirse la evasión e incorporar a los informales al mundo de la plena legalidad. También asegurándose que los grandes intereses económicos sean más solidarios en su contribución a la recaudación, lo cual implica eliminar los beneficios de que actualmente gozan. A tal punto ha llegado esta situación que las grandes corporaciones han acuñado el término de ganancias no tributarias, aludiendo que ciertas normas y los contratos de estabilidad los protegen. Gracias a estas normas, probablemente generadas por estudios de abogados corporativos, existen gigantes empresariales que no han pagado impuesto a la renta durante varios años consecutivos. ¡Al mismo tiempo, el pueblo tiene que pagar un Impuesto General a las Ventas (IGV) de 19%! Esas rentas del sector formal corporativo son también un obstáculo a la modernidad que probablemente explique por qué en materia tributaria desean mantener el statu quo. En realidad, el problema es de ética más que de legalidad, porque el Estado, al ser penetrado por los intereses del sector privado, ha asegurado ciertos privilegios por la vía de la ley. Por lo tanto, se requiere otro nivel de compromiso social, de responsabilidad o reciprocidad con el país. No es ético castigar a los pobres con impuestos tan altos porque entonces se les priva de alternativas y se extiende la cultura de la transgresión: las normas se perciben como injustas, particularmente para los pobres, y aparece como excusa para cualquier tipo de comportamiento, incluso los que atentan abiertamente contra el bien común. Solo lo justo debería ser universal.

Un último punto. ¿Cuáles son las consecuencias culturales de esta anomalía en las ideas y el comportamiento? ¿Qué se puede hacer al respecto?

Una de las consecuencias de estas tres economías es que ha cambiado nuestra cultura y, por lo tanto, nuestra forma de pensar y de comportamiento. Al desarrollarse las tres economías se ha consolidado y perfeccionado una cultura de transgresión que acarrea pérdidas económicas e institucionales al Estado, la empresa y la sociedad civil. Es así, para afirmarlo psicológicamente, porque al perderse el sentido de la culpa, se generaliza el principio antisocial del “todo vale”, lo que conduce a la violencia, el desorden, la estafa, la corrupción y la malversación. Si uno no tiene sentido de culpa, arremete o se aprovecha de los demás. Ese es un tipo de comportamiento que rige en la economía delictiva, se extiende a la informal y penetra incluso en la formal, que va cediendo terreno. Poco a poco el país viene conviviendo con la transgresión, que es el desconocimiento o la acción contra la norma, es decir, con las bases del acuerdo de convivencia social moderna.

Estamos, a pesar de los intentos por corregir algunos casos de corrupción y de victorias contra la informalidad y el delito, frente a una subversión valorativa que avanza. El alto grado de anomia cultural se revela en que la sociedad asigna un mayor valor a aquel que evade la legalidad, mientras quien cumple con la ley aparece como un tonto. Esta cultura se reproduce día a día, cotidianamente, al coexistir y entrelazarse las tres economías y penetrar el Estado para instrumentalizarlo. Por eso, no se corrige. No es, entonces, la solución organizar campañas valorativas, ni reformar el sistema escolar para “inculcar valores”, que en sí misma son buenas pero limitadas, porque las estructuras que las sostienen siguen intactas. El problema se superará atacando las bases institucionales de las economías no formales, lo que requiere un esfuerzo conjunto de la cada vez más acosada parte sana de la sociedad, la empresa y el Estado.

5. Reflexiones finales

En cuanto a las alternativas, siguen algunas ideas esbozadas en calidad de borrador. Una primera es la siguiente: si hay un animal en la casa, mientras uno no lo nombra no lo ve. Entonces, hay para empezar por corregir esta ceguera y afirmar que se nos ha metido una fiera en casa. Solo así se genera la voluntad para entender su comportamiento y enfrentar a la bestia. Hasta ahora lo que hemos hecho es ignorarla.

Una segunda es que, obviamente, la mejor forma de ubicarla y atacarla es por la vía democrática, porque también el desorden institucional genera arbitrariedad y crimen, lo que puede justificar el autoritarismo como salida. El desorden popular y la economía delictiva pueden alimentar tanto el ajuste de cuentas, en lugar de la rendición de cuentas, como la represión ciega.

Una tercera es tener en cuenta que, en la medida que las dos economías no legales incorporan a millones de peruanos, toda estrategia requiere sensibilidad frente al problema social, pero no al punto de la parálisis. No faltan quienes sostienen que no hay que encarar “porque es un problema social” y “para qué atizar el avispero”. El mayor valor es la legalidad o, si quiere, la formalidad. Esa es la única vía segura a la modernidad.

Una cuarta reflexión es que toda estrategia pasa entonces por el reforzamiento inteligente y justo, pero decidido, de esa legalidad. Se debe avanzar en la construcción de una institucionalidad gubernamental a todo nivel -municipal, regional, nacional, urbana y rural- y hacer que la sociedad civil se rija por la normatividad. Es un proceso de regeneramiento valorativo y cultural que se revela finalmente en el cambio de comportamiento y cultura a todo nivel: en la manera cómo compramos y vendemos, en el trato a los demás, en la acción del Estado, en la defensa de derechos tanto como en el cumplimiento de obligaciones. Desde ese ángulo se debe encarar el tema de la reforma del Estado. Si ocurre una verdadera reforma del Estado, la mayor forma de indicar el éxito es su capacidad de reforzar la formalidad, incorporar a los informales y combatir el delito.

Una quinta es que el Estado no actuará si al mismo tiempo no se desarrolla la capacidad de la sociedad civil de demandar cambios profundos y ejercer la vigilancia sobre el Estado y las élites económicas que impiden el cambio porque viven del, o se han acomodado al, statu qua. Allí están los principales bolsones o reservas morales del país, pero ya no se trata de una institucionalidad prístina por sufrir problemas de pobreza y exclusión y haberse envuelto en actividades que afectan, precisamente, la institucionalidad. Si las iniciativas no vienen del Estado, porque es débil, y está penetrado o capturado por los grandes empresarios, puede venir de elementos de la sociedad civil que estén menos contaminados y tengan mayor sentido de indignación como para generar la voluntad de cambio. Se pueden entonces generar formas más amplias y efectivas de presión sobre los políticos y representantes. Lo afirmo de modo tan general porque deben estar dirigidas a los grandes empresarios que operan en las tres economías, incluyendo la formal, que es parte del problema. Las leyes se obedecen cuando son justas y benefician a las mayorías; de poco sirven cuando solo favorecen a las élites.

Una sexta es que las reformas legales e institucionales deben contar con estrategias diferenciadas en tanto lo informal no es lo mismo que lo delictivo en grado y forma. En el caso de la informalidad, debería concebirse el cambio gradual y firme, buscando consenso para evitar un enfrentamiento y aislar a las burguesías que siempre se agazapan detrás de los pobres. Si se comienzan a bajar o eliminar las barreras legales, burocráticas y, sobre todo, tributarias, si se pueden eliminar o reducir algunas de las condiciones nacionales e internacionales que generan mercados negros, si al mismo tiempo se reconoce la propiedad a base de un sistema de registro moderno integrado; se podría avanzar poco a poco, municipio por municipio, región por región, en reforzar al sector formal. El avance en la formalización generaría mayores recursos en materia tributaria, lo que a su vez fortalecería la capacidad de acción del Estado.

Una séptima es que, en el caso de la economía delictiva, es inevitable un combate frontal, pero centrado en la lumpemburguesía, no en sus trabajadores. Generalmente el Estado ataca ciertas instalaciones menores y organiza operaciones ruidosas donde suelen caer los peces chicos o medianos, que son

sacrificados para aparentar acción rápida cuando la prensa reporta algún caso, hasta que el tema sale de la agenda y todo vuelve a esta normalidad anómica. Pueden ocurrir algunas ofensivas con éxito, honestas y bien intencionadas, porque no estamos frente a una contaminación total del Estado ni de la sociedad civil, pero, dado que tenemos estructuras económicas organizadas no formales con alto nivel de ganancia, debemos entender que se recuperan rápidamente. Detrás de cada mafioso que cae en un operativo hay otros dos esperando a tomar su lugar porque las condiciones están dadas para que esa economía reemplace a un agente caído por otro. Aquí, a diferencia de la economía informal, no puede haber tolerancia y solo queda el enfrentamiento inteligente y valiente.

La octava y última es que no debemos escuchar las voces de mirar hacia otro lado. El costo social que pagamos en términos de violencia y seguridad, falta de desarrollo social, dificultad para inversión, es demasiado alto, al punto de constituir el principal bloqueo a la modernidad esperada y hasta ahora nunca alcanzada. Sabemos que es un reto mayor, razón de más para reflexionar sobre cómo alinear todos los planetas para una acción que tenga éxitos. Un combate decidido y organizado es posible si combina un buen liderazgo, planificación, comunicación, capacidades y recursos. El primer requisito es clave. Para que se eche a andar, se requiere ante todo de un liderazgo al más alto nivel que garantice la voluntad política para actuar continuamente, y capacidad para entender y vencer la negligencia generalizada que se practica en el Estado.

Como se aprecia, el diagnóstico del otro Perú nos indica que la situación en materia de subdesarrollo, a pesar de los cambios, es “más de lo mismo”, en más de un sentido, pero al mismo tiempo debemos reconocer que, bien pensado el problema, la sociedad peruana de ayer; la tradicional, “ya fue”. En su búsqueda del cambio, el Perú entró por un camino pantanoso. Estamos frente a otra sociedad, la cual, a pesar de los logros en la economía del mercado y ciertas reformas, de lo esperanzador que es ver el avance de una economía emergente y popular con “capacidad de logros”, y observar su gran vitalidad cultural, constituye en realidad algo distinto, con predominio de factores y estructuras negativas.

El Perú ha llegado a otro estadio del subdesarrollo, uno donde la sociedad vive en un clima de violencia, pobreza y desorden, uno que opera con una cultura de transgresión que se extiende como una mancha de aceite y penetra el tejido social, no solo en el Estado sino en la propia sociedad civil.

Ese otro Perú debe verse y entenderse en toda su complejidad, tanto las partes como sus interrelaciones para corregir, según los casos, gradual o de golpe, sus muchas deformidades, para así generar esperanzas viables y democráticas de desarrollo. ¿Tenemos otra alternativa?